



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION

P R E S I D E N C I A

11
27/2013
TEC

159880

669

OF.

TEPJF-P-JALR-0197/2013

ASUNTO:

Opinión relativa a las acciones
de inconstitucionalidad
27/2013 y sus acumuladas
28/2013 y 29/2013.

México, D. F., a 8 de octubre de 2013.

SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E



FEDERACION
DE LA NACION
DE ACUERDOS
CONTROVERSIAS
ACCIONES D
ALIDAD.

En respuesta a la petición formulada en proveído de primero del mes y año en curso, dictado en las Acciones de Inconstitucionalidad 27/2013 y sus acumuladas 28/2013 y 29/2013, promovidas por el Partido Acción Nacional, el Procurador General de la República y el Partido del Trabajo respectivamente, notificado mediante oficio 3197/2013, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el pasado dos de octubre, anexo le envío la opinión emitida por este órgano jurisdiccional, en el expediente **SUP-OP-2/2013**.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E
MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS



c.c.p. Expediente

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

MHO

059427

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

2013 OCT 8 PM 4 33

OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA



PODER JUDICIAL I
SUPR MA CORTE DE JI
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALES
INCONSTITU

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recibido por correo SI NO de un enviado SI NO

por mensajería SI NO con _____ copias

y (1) anexos en (19) fols.

Se agrega sobre SI NO

Observaciones: _____

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARIA GENERAL
DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALES

2013 OCT 8 PM 5 19

SECCION DE TRAMITACION DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

670

EXPEDIENTE: SUP-OP-2/2013.

ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD: 27/2013,
28/2013 Y 29/2013 ACUMULADAS.

PROMOVENTES: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL;
PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y PARTIDO DEL
TRABAJO.

ÓRGANOS EJECUTIVO Y
LEGISLATIVO QUE EMITIERON Y
PROMULGARON LAS NORMAS
IMPUGNADAS: CONGRESO
CONSTITUCIONAL, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
DURANGO.



LA FEDERACION
DE LA NACION
DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

OPINIÓN, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 68, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOLICITA A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, INSTRUCTOR EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PRECISADAS AL RUBRO.

Cuestión preliminar.

El precepto de la ley reglamentaria invocado dispone, que si una acción de inconstitucionalidad se promueve contra un ordenamiento electoral, el Ministro instructor puede solicitar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **opinión** sobre los temas y conceptos especializados en la materia de su competencia¹, relacionados con el tema a debate sometido a la decisión del Alto Tribunal.

La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación², ha establecido que los criterios emitidos en estos casos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación -órgano jurisdiccional especializado en la materia-, carecen de fuerza vinculativa para el Máximo Tribunal, pero que aportan elementos complementarios para la adecuada interpretación de las instituciones jurídicas del ámbito electivo, como datos orientadores para el ejercicio del control abstracto de la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Por su parte, el numeral 71, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en cita³, establece que las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad interpuestas sobre la *no conformidad* de

1 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Abril de 1999; Pág. 255. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

2 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Febrero de 2002; Pág. 555. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL CONTENIDO DE LA OPINIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO DE AQUÉLLAS.

3 Artículo 71.

... Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial.

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TI
CONSTITUCIONAL
INCONS



SALA SUPERIOR

leyes electorales a la Constitución Federal, deben constreñir la materia de estudio a lo planteado por los actores en los conceptos de invalidez; por tanto, es dable inferir que la opinión solicitada por el Ministro instructor a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe referir en forma concreta a los temas cuestionados en los conceptos de invalidez.



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACTORES DE
NACIONALIDAD

Órganos ejecutivo y legislativo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas.

Las demandas del Partido Acción Nacional, Procurador General de la República y Partido del Trabajo, señalan como autoridad emisora de la norma general impugnada a la Sexagésima Quinta (LXV) Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Durango, y como entidades del Poder Ejecutivo que la promulgaron al Gobernador Constitucional, al Secretario General de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, todos de la entidad federativa señalada.

Normas impugnadas.

La norma general cuya validez se impugna es el Decreto número quinientos cuarenta, publicado en el número sesenta y nueve, Tomo CCXXVIII, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, de veintinueve de agosto de dos mil trece, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en particular, en lo tocante a los artículos 55, fracción XIX, 56, fracción V, 63, fracción V, 66, párrafos cuarto y quinto, 68 y 69, fracción II.

Disposiciones constitucionales violadas.

Los actores estiman violados en el caso a estudio, los preceptos 1, 14, 16, 35, fracciones I, II y VI, 36, 39, 40, 41, fracción II, 52, 54, 56, 115 y 116, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conceptos de invalidez.

A. DEMANDA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Primer concepto de invalidez.

Existió violación grave al procedimiento legislativo en la difusión y publicación de las iniciativas, debido que para ello se contravinieron los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 55, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, por la indebida fundamentación y motivación del acto por el que se aprobó el Decreto 540 (quinientos cuarenta) por la mayoría de integrantes del Congreso de la Entidad, porque se violentaron los límites de las atribuciones que la Constitución General otorga.

En lo relativo a la difusión señalada en el párrafo I, del artículo 130, de la Constitución Política local, debe ser una difusión o publicación fehaciente y efectiva, no simulada por medio cumplimiento a la norma, es decir, tiene que buscar los medios adecuados o de mayor difusión para cumplir con la citada

PODER JUDICIAL
SUPLENTE DEL CORTEC
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
IN. 08571



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

SUP-OP-2/2013

672



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA INDEFINICION
EQUIVALENCIA DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD.

publicación, y es el caso que el primero de agosto de dos mil trece, se mandaron publicar de manera indebida en el periódico "El Tiempo de Durango", las iniciativas presentadas por los tres poderes del Estado, que contienen la reforma integral, de ahí que la Comisión no fue la que ordenó realizar la publicación antes citada, toda vez que si bien quedó conformada, aún no había sesionado sino que lo hizo un día después a la señalada publicación en el periódico oficial; aunado a que ésta se realizó en un periódico que no tiene circulación en toda la entidad, de ahí que transgredió el derecho de los ciudadanos.

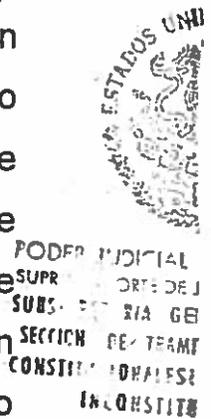
Segundo concepto de invalidez.

Se cometieron violaciones al procedimiento legislativo en cuanto a que se discuta, debata y construya con el conocimiento de los diputados las reformas orgánicas: solamente se votaron las reservas de los artículos más no así la aprobación de los artículos reservados en el dictamen.

El quince de agosto de dos mil trece, se reunió el Congreso de Durango con el objeto de llevar a cabo en lo general y en lo particular la lectura y discusión de los primeros cien artículos de la reforma a la Constitución local, continuando la sesión hasta el diecisiete de agosto siguiente; en primera instancia se aprobó el dictamen en lo general por veintitrés votos a favor y seis en contra; en lo particular se realizaron sesenta y un reservas a los cien primeros artículos del dictamen.

De manera que al llevar el procedimiento en particular, se realizaron ciento dieciséis reservas al dictamen; de ahí que se

observa la irregularidad consistente en que solamente se votaron las reservas de los diputados respecto del dictamen y en ningún momento se votó la aprobación de los artículos que se reservaron del dictamen, toda vez que la mayoría de las reservas no procedieron; en tal virtud, votada la reserva se debió haber votado la procedencia, es decir, la aceptación favorable o no de los artículos del dictamen así como los que no sufrieron modificación derivado de alguna reserva; en la parte final de la discusión del dictamen se observa que el Presidente de la Mesa Directiva sólo sometió a votación los artículos que no obtuvieron reserva, así como los transitorios que no sufrieron modificación alguna, lo cual violenta lo dispuesto en el artículo 186 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango.



La aprobación del Decreto no respetó el proceso legislativo correspondiente, lo que implica transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no haber dado cumplimiento el Congreso del Estado de Durango, a lo dispuesto por los artículos 115 y 116 del Pacto Federal; lo anterior, debido a que la publicación de dichas iniciativas se realizó en un periódico que no tiene una circulación en toda la entidad, porque este medio sólo tiene cobertura regional.

Se estima también, que respecto al procedimiento en lo particular, se llevó de manera irregular, al violentar de manera grave lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley Orgánica del Congreso, toda vez que se omitieron votar en lo particular ciento dieciséis artículos del dictamen que fueron reservados, con lo que se quebranta el orden constitucional y por ende, el



SALA SUPERIOR

principio de supremacía constitucional consagrado en la propia Constitución.

Opinión:

La Sala Superior considera inconducente pronunciarse sobre los tópicos aducidos por el partido actor, en los conceptos de invalidez primero y segundo, en los que impugna violaciones "graves" en su concepto cometidas en el proceso legislativo de reformas y adiciones a la Constitución del Estado de Durango, así como por la indebida motivación y fundamentación del acto por el que se aprobó el Decreto impugnado.

En este aspecto se debe señalar, que la serie de etapas que se siguen a fin de elaborar o modificar una ley o decreto, conocida como proceso legislativo, se debe desarrollar conforme a lo establecido en la normativa aplicable, porque estos actos constituyen una unidad indisoluble con el ordenamiento que deriva del mismo, lo que implica que su impugnación requiere del análisis conjunto de las fases o etapas precedentes una vez que culminan con su publicación, a efecto de determinar si las violaciones aducidas en la acción de inconstitucionalidad, infringieron las garantías de debido proceso y legalidad reconocidas en la Constitución General de la República, para en su caso provocar y decretar su invalidez o, en su defecto, para establecer que no alcanzan relevancia invalidante porque respetan los atributos democráticos finales de la decisión.

Es decir, para evaluar la regularidad constitucional de un procedimiento legislativo, se impone el análisis de los aspectos

ya precisados, además, entre otros, de las reglas de integración y quórum del órgano competente; de las que regulan el objeto y desarrollo de los debates; de las pautas de votación establecidas; del momento deliberativo y de la forma de darle publicidad; etapas que como se anunció se deben evaluar a la vista del trabajo parlamentario en su integridad para determinar si existieron irregularidades que impactan en la decisión final.

Tal revisión es independiente del análisis de las violaciones de carácter sustantivo de las que pueda derivar la invalidez o inconstitucionalidad de la norma impugnada, de trascender los vicios procedimentales de que se trate, de modo fundamental a la ley con la que culmine ese proceso de creación legislativa, porque se insiste, el análisis de los actos en el proceso de creación normativa, son aspectos formales que se deben analizar en sus méritos frente al texto constitucional con la norma resultante, con motivo de los cuestionamientos que de esa índole haga valer el promovente.

De igual forma, el análisis de la exigencia de cumplir con los requisitos de **fundamentación y motivación**, que abarca a todas las autoridades, y que tratándose de actos legislativos se satisfacen siempre que las autoridades encargadas de la formación de las leyes actúen dentro de los límites de las atribuciones que la Ley Suprema les confiere (**fundamentación**) y que las normas que expidan refieran a relaciones sociales que requieran ser jurídicamente reguladas, de acuerdo con la evolución y desarrollo político, económico y social de la entidad federativa en las que deben regir (**motivación**), para determinar si se cumplió con la garantía de



PODER JUDICIAL
SUPREMACORTE
SUBSECRETARIA
SECCION DE TR
CONSTITUCIONAL
INCONSE



SALA SUPERIOR

legalidad, son circunstancias ajenas a la especialidad del derecho electoral.

Lo señalado impide a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se anticipó, asumir una posición especializada en la opinión técnica que le es requerida, en razón de que los alegatos dejan de controvertir un tema específico del derecho electoral.



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
COMITÉ DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
CONSTITUCIONALIDAD.

Tercer concepto de invalidez.

El artículo 66, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, provoca fraude a la ley, conforme al que se puede permitir la sobre-representación de los partidos predominantes y la sub-representación de las minorías en razón a que su porcentaje de votación no se encuentra ni es proporcionalmente justificado entre los votos obtenidos y la representación en el Congreso.

El sistema electoral del Estado de Durango, respecto a sus convenios de coalición, permite la transferencia de votos en una franca simulación a la ley, que radica en que los partidos políticos que obtienen menor porcentaje de votos celebren coaliciones con partidos minoritarios, pactando el porcentaje de votación alcanzado como coalición, obteniendo un resultado no auténtico por la transferencia de votos realizados, y aunque al distribuirse o trasladarse votos al partido que no alcanza el porcentaje mínimo de votación, perjudica al partido actor en razón que esos escaños que le otorgan a los partidos

minoritarios deberían ser sitiales que en realidad reflejen la votación obtenida por cada fuerza política.

Lo anterior atenta en contra de las bases que deben observar las legislaturas estatales, mismas que por ningún motivo se deben apartar del espíritu de la Constitución Federal, ni de sus principios y parámetros.

La inconstitucionalidad alegada radica en el establecimiento de un límite a la sobrerrepresentación, porque la Constitución local, en el artículo 54, fracción V, señala como tope máximo el 8% más de la votación obtenida del total de la Cámara, es decir, tomando en consideración el ingreso al Congreso por ambos principios.

PODER JUDICIAL
SUPR. CORTE
SUB: MA 6
SE- CEN M TAN
CONSTITUCIONAL
LA JONSTU

De ahí, que en el artículo 66 impugnado, el legislador excede o rebasa lo dispuesto en la Constitución Federal, al establecer el doble de lo que ésta señala como tope del porcentaje de votación excedente por ambos principios, vulnerando con ello la finalidad de la representación proporcional.

De modo que la porción normativa referida, genera inequidad y sobrerrepresentación al establecer como candado electoral para la asignación de diputados, un tope muy alto en comparación con los parámetros que señala la Constitución Federal, en razón de dieciséis (16) puntos porcentuales y con ello genera también una sub-representación respecto de aquellos partidos que, si bien obtienen un escaño en el cual estarán representados en el Congreso por haber obtenido el porcentaje mínimo para ser partícipes de la asignación, también



SALA SUPERIOR

es cierto que el porcentaje que obtienen de votación no es el verdadero reflejado en el Congreso del Estado, atentando con ello no sólo los derechos de los partidos, sino también contra el derecho del electorado a ser representado en la forma y porcentajes que el mismo decidió.



DE LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA FEDERACION
GENERAL DE ACUERDOS
TE DE GUSTOS
Y DE ACCIONES DE
U.C.I.D. MAJIS AD.

En el registro de candidaturas de mayoría relativa, una de las condicionantes es que un determinado número de distritos electorales uninominales el registro debe ser por partido político y no por coalición para poder evitar la transferencia de votos; el establecimiento de un porcentaje mínimo para tener derecho a la asignación de curules; el otorgamiento de un escaño o más dependiendo del cumplimiento de ciertos porcentajes de votación de manera proporcional en la mayoría de las legislaciones es del 2.5%, como votación mínima obtenida para tender derecho a asignación; de ahí que el señalado 16% sea un porcentaje demasiado alto como parámetro.

Opinión:

La Sala Superior estima inconducente emitir pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad planteada respecto del límite de representación previsto en la norma impugnada.

El precepto de la Constitución Política de Durango materia de la controversia, es del contenido siguiente:

Artículo 66.

El Congreso del Estado, representa al pueblo duranguense y ejerce las funciones del Poder legislativo. (sic)

El Congreso del Estado se compondrá de veinticinco diputados electos en su totalidad cada tres años en los términos de esta Constitución y de la ley, los diputados integrarán legislaturas. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

De los veinticinco diputados, quince serán electos bajo el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y diez bajo el principio de representación proporcional, mediante listas votadas en la circunscripción plurinomial que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado.

Ningún partido político podrá contar con más de quince diputados asignados por los dos principios de representación a que se refiere el párrafo anterior.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso del Estado que exceda en dieciséis puntos a su porcentaje de votación estatal emitida, esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de votación emitida más el dieciséis por ciento.

En principio, esta Sala Superior considera importante destacar que acerca de la inconstitucionalidad planteada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2003, sostuvo que si bien el artículo 54, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé un límite del ocho por ciento, las Legislaturas Estatales no se encuentran constreñidas a establecer en sus ordenamientos un tope idéntico.

Asimismo, al resolver el citado asunto, el Máximo Tribunal Constitucional determinó que el límite del dieciséis por ciento previsto en la legislación del Estado de Quintana Roo, el cual es igual al porcentaje previsto en el artículos 66, último párrafo, de





SALA SUPERIOR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA NACION
SERVICIO DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
Y ELECCIONES DE
AUTORIDAD.

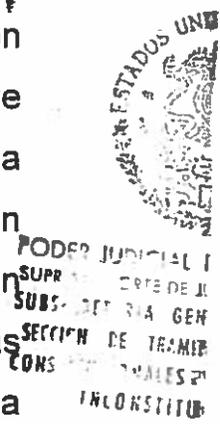
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, que en este asunto se controvierte, no son contrarios al artículo 54 de la Constitución Federal, al existir un tope al número de diputados que puede alcanzar un partido político por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en tanto el porcentaje señalado cumple con los fines y objetivos que se persiguen con el pluralismo político ya que permite a los partidos minoritarios, con cierta representatividad, participar en la integración del Congreso estatal e impide a la vez que los partidos mayoritarios obtengan un alto grado de sobrerrepresentación.

El anterior criterio está reflejado en las jurisprudencias P./J. 75/2003 y P./J. 77/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas a fojas 523 y 533, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, cuyos rubros son **“CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. SOBRRERPRESENTACIÓN. EL ARTÍCULO 229, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE DICHO ESTADO, AL PREVER COMO LÍMITE UN PORCENTAJE DE 16%, NO VIOLA EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”** y **“CONGRESOS LOCALES. SOBRRERPRESENTACIÓN. NO ESTÁN OBLIGADOS A CONSIDERAR COMO LÍMITE EL 8% QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”**.

Además de los criterios expuestos, se debe señalar que la porción normativa del artículo controvertido, determina que los

partidos políticos no pueden contar con más de quince diputados, sumando los electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, cantidad que coincide con el número de distritos electorales en el Estado.

Sin que obste a la anterior conclusión que el Partido Acción Nacional formuló diversos razonamientos en el sentido de que en el sistema electoral de Durango se permite la transferencia de votos a través de los convenios de coalición, para obtener un resultado que no es auténtico; sin que identificara bajo un apartado específico las consideraciones respecto a qué normas transgreden el Pacto Federal en ese aspecto en particular, toda vez que tales argumentos los vierte para reforzar la inconstitucionalidad alegada.



B. DEMANDA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Primer concepto de invalidez.

El artículo 56, fracción V, de la Constitución del Estado de Durango, al establecer que los ciudadanos duranguenses serán preferidos a cualquier otro ciudadano mexicano para toda clase de concesiones, empleos, comisiones o cargos públicos, es contrario al artículo 1º de la Constitución Federal, porque violenta los principios de igualdad y no discriminación que dicha norma reconoce.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

SUP-OP-2/2013

67

En el caso, en las diversas iniciativas de reforma constitucional y en el dictamen de la Comisión dictaminadora, se explica por qué se justifica el trato diferenciado establecido en la norma impugnada, pero sin establecer las razones válidas para dar una ventaja a los duranguenses en cuanto a las concesiones, empleos, comisiones o cargos públicos, respecto del resto de los mexicanos.



LA FEDERACION
DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE LA FISCALIA
AL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIA
DE ACCIONES D
DE INVALIDAD.

Se agrega, que de ninguna forma se expone que esta medida puede ser necesaria para lograr el fin buscado, o que sea la menos "invasiva" para los derechos del resto de los mexicanos, tampoco es una norma proporcional, porque se afecta el derecho al acceso a concesiones y a cargos públicos de nacionales que no son duranguenses, sin que se justifique esta "acción afirmativa" para proteger una situación de ventaja o vulnerabilidad de los duranguenses respecto de otras personas que no son ciudadanas de la entidad.

También se estima el precepto impugnado contrario al artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, porque de éste se advierte que los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de acceder a los empleos, cargos o comisiones del servicio público, siempre y cuando se cumplan con las calidades exigidas por el legislador, sin establecer restricciones al ejercicio de la prerrogativa a que refiere la norma impugnada, al hecho de ubicarse en el supuesto de contar con alguna ciudadanía específica para acceder al cargo público a que se aspire.

De ahí que el legislador local no debe establecer normas que discriminen por origen étnico o nacional, porque es contrario a lo Constitución Mexicana, por lo que el vicio de inconstitucionalidad del que adolece la señalada norma Estatal, atenta contra la dignidad humana, en virtud de que anula y menoscaba los derechos y libertades de las personas, como los laborales.

Opinión:

Los planteamientos del promovente de la acción de inconstitucionalidad, permiten derivar que la cuestión a dilucidar es si el artículo de la Constitución local impugnado contraviene los principios de igualdad y no discriminación, reconocidos en el artículo 1º de la Constitución Federal, tópico que excede la materia del derecho electoral.

El precepto de la Constitución de Durango, en la porción impugnada a la letra dice:

Artículo 56.-

Son derechos de los ciudadanos y ciudadanas duranguenses los que para todo mexicano consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los siguientes:

...

V. Ser preferido a los extranjeros, y aún a los mexicanos que no sean ciudadanos duranguenses, en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones, y para todos los empleos, comisiones o cargos públicos.



PODER JUDICIAL
SUPR. COORTE DEL
SUBS. PRESIDEN
SECCION DE TRAM
CONSTITUCIONALES
INCONSTIT



SALA SUPERIOR

El análisis de constitucionalidad de la norma transcrita, se plantea en confrontación con el artículo 1º de la Constitución Federal, en el que aduce el promovente se reconocen en los párrafos primero y quinto, las garantías que se estiman trastocadas, conforme a lo siguiente:



Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El texto constitucional enunciado, permite derivar el contenido de la garantía de igualdad jurídica, misma que se debe entender bajo el concepto de que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social.

Así se puede establecer, que este principio persigue la existencia de normas en el orden jurídico que al aplicarse no generen un trato discriminatorio a las personas en situaciones

análogas, o que propicien efectos similares respecto de aquellos sujetos que se encuentren en situaciones dispares.

Por tanto, conforme al texto de la norma constitucional, los poderes públicos tienen obligación de garantizar a las personas que se encuentren en una misma situación de hecho que sean tratadas en forma igual, es decir, sin privilegio ni favoritismo alguno.

Esta garantía se reitera los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la "Declaración Universal de Derechos Humanos" y el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", concretamente, en los artículos 7 y 26, respectivamente, que, de conformidad con el ordinal 133 de la Carta Magna, son considerados la Ley Suprema de la Unión.

Conforme a lo expuesto, la no discriminación es un derecho fundamental, subjetivo y público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas en las mismas circunstancias.

De tal manera, si conforme al aludido artículo 1º constitucional, se establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades de los ciudadanos, protegidos por la ley sin distinción alguna, y que por ello, deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de oportunidades para ejercer las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra, tales conceptos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL D
SUPR DE JUS
SUBSECRETARÍA GENE
SECCIÓN DE TRANTE
CONSTITUCIONALES Y
INSTITUC



SALA SUPERIOR

estrechamente vinculados, y por ende complementarios, abarcan diversas ramas del ordenamiento jurídico.



LA FEDERACION
CIA DE LA NACION
L DE ACUERDOS
DE ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA DEL N
DE ACIONES DI
NALIDAD.

— La idea de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre los derechos de las personas con base en su nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social es consecuencia de que todas son iguales ante la ley; es decir, la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad.

Así, no es admisible crear diferencias de trato entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza; sin embargo, como la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.

Como se advierte de lo anterior, las garantías de igualdad y no discriminación, son derechos fundamentales establecidos por la Constitución federal para que existan normas que al aplicarse no generen un trato discriminatorio y evitar distinciones entre los derechos de las personas con base en su nacionalidad,

raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En ese sentido y toda vez que la norma de la que se plantea su invalidez, establece según los promoventes una circunstancia discriminatoria para quienes no sean Ciudadanos Duranguenses, respecto de las concesiones, empleos, comisiones o cargos públicos, la definición del tema de inconstitucionalidad planteado rebasa el ámbito de la materia electoral, conforme a las consideraciones expuestas, de ahí que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se anticipó, estima inconducente emitir opinión en este tópico en particular.



PODER JUDICI
SUPR. CORTS
SUBS. RET. TIA
SECCION DE 1
CONSTITUCION
DURANGO

Segundo concepto de invalidez.

El artículo 69, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Durango, atenta contra el régimen de gobierno del Estado mexicano estatuido en los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, contra el derecho a ser votado para los cargos de elección popular, prerrogativa establecida en el artículo 35, fracción II constitucional y contra el derecho a no ser discriminado regulado en el artículo 1º constitucional.

El mencionado artículo, señala que para ser diputado se requiere saber leer y escribir; empero, la realidad social de nuestro país pone en evidencia que un gran número de ciudadanos, capaces de expresar las necesidades y anhelos del pueblo no tienen la instrucción requerida por la norma local.



SALA SUPERIOR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADÍSTICA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL DE ACUERDOS
CONVENIO DE CONTROVERSIAS
Y DE ACTUACIONES DE
NACIONALIDAD.

El analfabetismo tiene una incidencia mayor entre ciertos grupos especialmente vulnerables que están incluidos en el último párrafo del artículo 1º constitucional, ya que afecta de manera desproporcionada a personas con motivo de su origen étnico (pueblos indígenas), su género y su condición social. De ahí que la medida legislativa sea violatoria al derecho de igualdad y a la no discriminación del artículo 1º al impedir el acceso a cargos de elección pública a los grupos sociales más marginados; es decir, se les veda la posibilidad de representar su comunidad y los intereses de los grupos a los que puedan pertenecer, lo cual no es razonablemente constitucionalmente.

De ahí que el mencionado artículo no contiene una restricción válida y legítima respecto del ejercicio del derecho a ser votado, puesto que si bien pudiera ser deseable que un legislador tuviere la instrucción mínima a que refiere el citado precepto, la realidad muestra que muchos ciudadanos capaces de expresar la soberanía popular, no saben leer ni escribir y, aun así, la voluntad del pueblo puede consistir en que sean ellos quienes los representen.

Por tanto, la citada norma viola los derechos reconocidos en los artículos 1º y 35 constitucionales, porque establece un supuesto de restricción al derecho a ser votado, sin sustento constitucional ni fundamento legal, lo cual es contrario también a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Opinión:

La disposición legal cuya invalidez se plantea a la letra establece:

Artículo 69.

Para ser diputado se requiere:

[...]

Saber leer y escribir.

[...]

El señalado precepto de la Constitución local, en consideración de este órgano jurisdiccional, resulta conforme a la Carta Magna, contrario a que lo hace valer el actor.



Los artículos constitucionales que el promovente estima violados, son los siguientes:

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 35.- Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

...

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;...



DE LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA MANO
GENERAL DE ACUERDOS
DE DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
JECIONALIDAD.

De lo transcrito se advierte, que la no discriminación es un derecho fundamental, subjetivo y público del ciudadano de ser tratado en la misma forma que los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a las personas en las mismas circunstancias.

Ahora bien, conforme a lo anterior, el precepto 1º de la Constitución Federal establece la prohibición de todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades de los ciudadanos, protegidos por la ley sin distinción alguna, y, por ello, señala que deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de oportunidades para ejercer las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra.

El dispositivo 35 de la Norma Suprema, se ubica en el título primero, capítulo II, 'De los ciudadanos mexicanos', y regula dos derechos humanos distintos:

- a) El derecho de ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

b) El derecho de ser designado para cualquier empleo o comisión públicos, distintos a los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Respecto al primero de los derechos humanos previsto en el precepto constitucional citado, resulta relevante precisar cuáles son las calidades que deben reunir los ciudadanos para ejercer el derecho a ser votado para determinado cargo de elección popular.

En este sentido, cabe precisar que el concepto de calidad aplicado a una persona se debe entender como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a ésta, por lo propio, natural o circunstancial y la distingue de las demás, cuyo sentido se obtiene de la definición que tiene el concepto inherente, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 'lo que por su naturaleza está de tal manera unido a otra cosa, que no se puede separar de ella.'

Además, también está dirigida a establecer la calidad de una persona en los aspectos propios y esenciales de ésta, esto es, el punto de partida de la expresión para ejemplificar lo definido, precisamente, la naturaleza y la edad.

Sin embargo, en lo que refiere la expresión "teniendo las calidades que establezca la Ley", se debe entender que está referida a otras características de la misma clase o entidad, es decir, propias del individuo y no derivar de elementos o requisitos ajenos al ciudadano.





SALA SUPERIOR

El principio de razonabilidad implica que las leyes que establecen derechos y deberes, y los actos de las autoridades deben ser acordes al espíritu de la Constitución Nacional, a la que no deben contradecir, por ser el medio de conducir a su plena vigencia y eficacia.



DE LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA NACION
Tribunal Electoral
de los Estados Unidos
Mexicanos
V. DE ACCIONES
ELECTORALES

Además, el principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.

Por consiguiente, el legislador estatal en sus Constituciones o leyes, además de los requisitos o condiciones que se prevén, podrá establecer otras distintas siempre y cuando sean inherentes a su persona y éstas cumplan con los requisitos de objetividad y de razonabilidad, a fin de no hacer nugatorio el derecho fundamental de que se trate o restringirlo en forma desmedida.

Por tanto, el requisito de elegibilidad de saber leer y escribir previsto en la Constitución del Estado de Durango, es objetivo y razonable ya que atiende en mayor medida a la finalidad de la elección de los cargos en cuestión, para el ejercicio de las formas propias de gobierno del órgano legislativo que integrarán.

Ello es así, porque los Diputados, durante el ejercicio del cargo realizan diversas acciones propias de la naturaleza legislativa relativas a la discusión y aprobación de normas jurídicas y otras



SALA SUPERIOR



DE LA FEDERACION
JUSTICIA: LA NACION
GENERAL DE ACUADOS
ITE DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
FEDERACION AD.

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

- a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
- b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
- c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

De esta forma, la medida legislativa cuestionada se adecua a la regularidad constitucional, dado que resulta idónea, adecuada, proporcional y razonable, porque si las calidades o requisitos que establece una ley, como se explicó, no deben ser necesariamente inherentes al ser humano, sino que pueden incluir otras condiciones que satisfagan razones de interés general, esto resulta compatible con el precepto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se precisó.

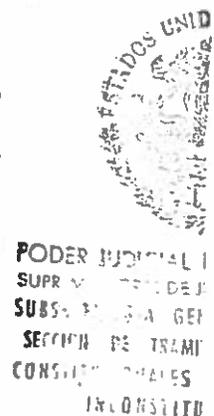
De ahí que en consideración de la Sala Superior, el contenido del artículo impugnado que se analiza es conforme a la Constitución Federal.

C. DEMANDA DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

Primer concepto de invalidez.

El artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango viola los artículos 14, 16 y 116, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, porque el procedimiento legislativo llevado a cabo para aprobar la reforma impugnada, contraviene el **principio de legalidad** contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las autoridades tienen la obligación de **fundar y motivar** la cusa legal del procedimiento, siendo que en el caso, los órganos legislativos en cuyo seno se desarrolla el procedimiento legislativo, deben regirse también por las premisas políticas que derivan de los artículos 39, 40 y 41 de la Carta Magna, a fin de garantizar la participación de las minorías en los órganos legislativos.



Esto, derivado del argumento subjetivo del legislador local para aprobar la norma que se impugna: "A) En el caso del Poder Legislativo, la Comisión hace suyo el reclamo social y político de la reducción del número de diputados que integran el Congreso Local, por lo que se plantea una composición de veinticinco diputados siendo electos quince de mayoría relativa y diez por el principio de representación proporcional".

De ahí que reducir en tres el número de diputados por el principio de representación proporcional, resulta por demás insuficiente y carente de la debida fundamentación y motivación, que se consagra en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la norma fundamental.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA FEDERACION
TICIA DE LA N
AL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
DE ACCIONES DE
IONABILIDAD.

Debe declararse la invalidez propuesta, toda vez que no se observó por parte del legislador local el principio de legalidad, ya que aun cuando el Congreso del Estado de Durango posee facultades para legislar, reformar o abrogar y derogar leyes y decretos, lo debe hacer observando los requisitos establecidos en la norma constitucional y en las leyes aplicables, lo cual no ocurrió así, dado que sólo razonó de manera indebida e inconstitucional que recogía el "reclamo social y político" para efectuar una reducción en la composición del Congreso.

La fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el marco general que regula el sistema electoral del país, previendo la aplicación del principio para la debida integración de las legislaturas locales, atendiendo a que "El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de los habitantes de cada uno", es decir, existe una limitante para el legislador local, que le impone un determinado número de representantes en una relación proporcional al número de habitantes, y no de manera unilateral y discrecional.

Con la modificación de la norma que se reclama, no se garantiza la efectividad del sistema electoral, en virtud de que rompe con el espíritu de la debida integración de la legislatura local de conformidad con la Constitución General, por lo que se solicita analizar la reforma con la base poblacional, así como las condiciones y características que la sustentan, para declarar en su oportunidad su invalidez, máxime que en la entidad ha existido un crecimiento demográfico, por lo cual, no se observa

una razón lógico-jurídica para disminuir el número de diputados tanto de mayoría relativa y de representación proporcional, ya que en todo caso, debió aumentar el número de diputados por ambos principios, con los límites, inhibiciones y prohibiciones que impone el Pacto Federal.

Con lo anterior, se inobservó la base poblacional al disminuir de manera arbitraria, unilateral e ilegal el número de diputados, por lo que es inequitativa, al distorsionar el auténtico acceso a la representación política, por lo que resulta inconstitucional.

Opinión:

La Sala Superior considera inconducente emitir **opinión** sobre los tópicos aducidos por el partido actor, ya que impugna violaciones cometidas en el proceso legislativo de reformas y adiciones a la Constitución del Estado de Durango, por la indebida motivación y fundamentación del acto por el que se aprobó el Decreto impugnado, ya que como se anunció en este propio dictamen, no es posible asumir una posición especializada, en razón de que tales cuestiones constituyen un tema específico ajeno al derecho electoral.

Segundo concepto de invalidez.

El artículo 66, párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política de Durango, contraviene los artículos 1º, 35, fracciones I; y II; 40, 41, 54 y 116, fracción II de la Constitución Federal.





SALA SUPERIOR



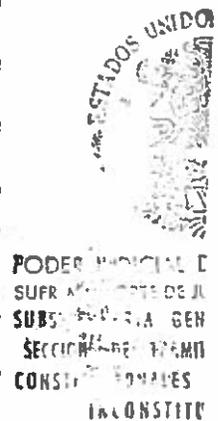
DE LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA MANO
GENERAL DE ACUERDOS
COMITE DE CONTROVENCIONES
Y DE ACCIONES DE
CONSTITUCIONALIDAD.

La redacción de dicho precepto "... pretende que un partido político pueda contar con un número de diputados por ambos principios que representen hasta el 16% del porcentaje del total del Congreso...", separándose de la proporción establecida en la Constitución Federal del 8% y transgrede la jurisprudencia 77/2003 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esencia menciona que las legislaturas locales no pueden alejarse significativamente de los porcentajes establecidos en la Carta Magna, tesis que debe interpretarse de forma administrada con la diversa jurisprudencia 85/2011 de ese Alto Tribunal, que refiere a que las legislaturas locales no se deben alejar en forma evidente de los porcentajes establecidos en la Constitución Federal y que tratándose del límite a la sobrerrepresentación, estos se deben analizar en atención al número de componentes de los Congresos y a que la norma cumpla con los fines y objetivos perseguidos por el principio de representación proporcional y el valor del pluralismo político, por lo cual debe atenderse al sistema legislativo en el cual se inserta.

De ahí, que en el caso, los párrafos en cuestión dejan de cumplir con los fines y objetivos perseguidos por el señalado principio, como lo es garantizar que el órgano legislativo se integre por representantes de diversas corrientes y posturas políticas (garantía de pluralidad), sin exclusiones, sin la "tiranía de las mayorías", a efecto de que pueda "reproducirse" una representación de la manera más cercana a la realidad del cuerpo social que habita en un territorio determinado, por lo cual, lejos de fomentar un órgano legislativo incluyente, propicia la exclusión de diversas fuerzas y posturas ideológicas al dejar

abierta la posibilidad de otorgar una mayoría artificial a una fuerza política dominante.

En el Estado de Durango, las estadísticas y tendencias electorales, muestran claramente que existe un partido dominante que obtiene casi la totalidad de candidaturas de mayoría relativa, por lo cual, al permitirse un límite de sobrerrepresentación de hasta un 16% por ambos principios, es evidente que se fomenta un sistema de partido casi único con una oposición controlada o insignificante, de ahí que la norma cuya invalidez se solicita, no cumple con los fines y objetivos perseguidos por el principio de representación proporcional.



Precepto que además regula la disminución del número de integrantes del Congreso de Durango, mismo que pasa de 30 a 25 sin que en la reforma o incluso en la exposición de motivos, se advierta algún argumento o parámetro que la reducción del número de integrantes del Congreso de Durango.

Por tanto, el artículo 66 de la Constitución de Durango es contrario a los fines y objetivos del principio de representación proporcional ya que no sólo disminuye el número de integrantes del Congreso, sino que además aumenta el margen de sobrerrepresentación imponiendo una barrera de hasta 16% de su integración, sin tomar en cuenta los componentes territorial, histórico, demográfico e incluso económico, mismo que era necesario en una sociedad altamente diversificada como es la población duranguense que necesita un pluralismo político real.

Opinión:



SALA SUPERIOR

Respecto al tópico relativo a la invalidez de los párrafos cuarto y quinto del artículo 66 de la Constitución Libre y Soberana del Estado de Durango, que se solicita por estimarlos contrarios al porcentaje que se señala en el Pacto Federal, se estima inconducente emitir opinión, por las razones externadas al abordar el análisis del concepto de invalidez del Partido Acción Nacional y que refiere al mismo tema, en virtud de ya existir pronunciamiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA NACION
AL DE ACUERDOS
DE CONVERSAS
DE ACCIONES DE
INICIALISMO.

Se tiene presente igualmente, que el partido actor refiere la invalidez de la norma impugnada por la disminución de integrantes del Congreso de Durango, de pasar de 30 a 25 diputados, ya que el legislador de la entidad dejó de motivar tanto en la reforma como en la exposición de motivos, y que tales circunstancias las encamina a apoyar su propuesta de invalidez derivada de la indebida fundamentación y motivación, cuestión que como se adujo es ajena a la materia electoral.

Tercer concepto de invalidez.

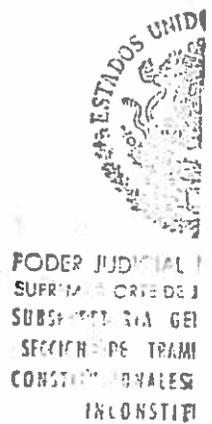
El artículo 63, párrafo V, de la Constitución Política del Estado de Durango, es contrario al artículo 41, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicho precepto establece que habrá un procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierden su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado, y en el caso del financiamiento público a partidos políticos nacionales también deberán

reintegrarse al Estado, incluyendo el patrimonio adquirido con financiamiento público estatal.

Lo anterior, toda vez que no es posible jurídica y constitucionalmente que un partido político nacional también deba de reintegrar su financiamiento público que recibe como prerrogativa a nivel nacional al Estado, así como los bienes muebles e inmuebles que haya adquirido con financiamiento federal que es otorgado por medio del Instituto Federal Electoral y fiscalizado por dicha autoridad, por tanto, si bien la prerrogativa o financiamiento público estatal que perciba algún partido político nacional que se haya adquirido con recurso estatal es factible que estos deberán ser adjudicados al Estado, no debe ser así con los que se hayan adquirido con recurso general.

De ahí que no exista competencia para que el Estado se adjudique los bienes y recursos que percibe dicho instituto político con prerrogativa federal, porque las entidades federativas no tienen la facultad ni la competencia para enajenar o adjudicarse el patrimonio que hayan adquirido los partidos nacionales cuando hubiera la liquidación de los mismos por la pérdida de su registro, por tanto, lo inconstitucional del artículo 63, párrafo V de la Constitución Política del Estado de Durango.

Opinión:





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SUP-OP-2/2013

SALA SUPERIOR

El artículo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango cuya inconstitucionalidad se plantea es el siguiente:

Artículo 63.

Las elecciones de Gobernador del Estado, diputados, e integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. La jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de julio del año que corresponda.

La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado o los municipios, según corresponda; **en el caso del financiamiento público o a partidos nacionales, debe reintegrarse al Estado "incluyendo" el patrimonio adquirido con financiamiento público estatal, reportándolo en la rendición de cuentas al Consejo Estatal Electoral.**

La Sala Superior considera inconducente emitir el parecer solicitado en el tema a estudio.

Lo anterior, en virtud de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la Acción de inconstitucionalidad 14/2004 y acumuladas 15/2004 y 16/2004, promovidas entre otros por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de diversas disposiciones electorales en el Estado de Quintana Roo; y la Acción de inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009, promovidas por los Partidos Políticos del Trabajo, Socialdemócrata, de la Revolución Democrática y Convergencia, en contra de disposiciones del

Estado de Aguascalientes, ya se pronunció sobre el tema en particular.

En ese sentido, estableció que la pérdida de la acreditación estatal de un partido político traerá como consecuencia, entre otras, la cancelación de los derechos y prerrogativas estatales, el que la totalidad de los activos que el partido político nacional haya adquirido a través de las prerrogativas estatales recibidas mientras tuvo su acreditación estatal, pasen a propiedad del Instituto Estatal Electoral, lo que no viola el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral deben establecer el procedimiento para la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro así como el destino de sus bienes y remanentes, al ser facultad de los Constituyentes Locales y de las Legislaturas Locales garantizar este tipo de procedimientos en su normativa estatal, es decir, esta materia está delegada al ámbito local.

De las señaladas acciones de inconstitucionalidad derivaron las jurisprudencias P./J63/2004, publicada en la foja 811, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XX, septiembre de 2004, de rubro **PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE LOS QUE PIERDAN SU ACREDITACIÓN O REGISTRO ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL, LE ENTREGUEN A ÉSTA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE POSEAN Y QUE HAYAN SIDO ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO**



PODER JUDICIAL
SUPR. CRTE DE
SUB. XT. RIA GE
SE. ZI. PE. TRAN
CONSTITUCIONALES
JNCONSTIT



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SUP-OP-2/2013

SALA SUPERIOR

PÚBLICO LOCAL, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, y la tesis P.J/40/2010, visible a fojas 1598, del señalado Semanario Judicial de la Federación, 9a. Época; Tomo XXXI, Abril de 2010, de título PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE PREVÉ LA CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE LA ACREDITACIÓN LOCAL NO VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), CONSTITUCIONAL.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
E LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA NACION
TRIBUNAL ELECTORAL DE ACUERDOS
EN MATERIA DE CONTROVERSIA
Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

Por las razones expresadas en el cuerpo de este dictamen, se concluye:

PRIMERO. Es inconducente emitir opinión respecto de los conceptos de invalidez relativos a las violaciones procedimentales que se alegan cometidas en el proceso legislativo de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; por la indebida motivación y fundamentación alegada del acto por el que se aprobó el Decreto impugnado; al estimarse que los tópicos señalados se apartan específicamente de la materia electoral; y respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 56, fracción V, y 66 párrafos cuarto y quinto de la Constitución Estatal precisada, al ya existir pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, opina que el artículo 69, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Decreto quinientos cuarenta, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, número

sesenta y nueve, Tomo CCXXVIII, del veintinueve de agosto de dos mil trece, es conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Emiten la presente opinión los Magistrados integrantes de la Sala Superior, con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, ante el Secretario General de Acuerdos quien da fe.

México, Distrito Federal, a ocho de octubre de dos mil trece.

MAGISTRADO PRESIDENTE

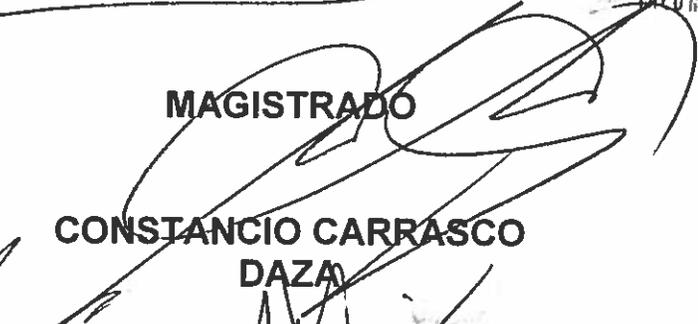

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

PODER JUDICIAL
SUPR MA CORTE DE
SUBS: RETARIA GI
SECCION DE TRAB
CONSTITUCIONALES
INCONSTAI

MAGISTRADA


**MARÍA DEL CARMEN
ALANIS FIGUEROA**

MAGISTRADO


**CONSTANCIO CARRASCO
DAZA**

MAGISTRADO


FLAVIO GALVÁN RIVERA

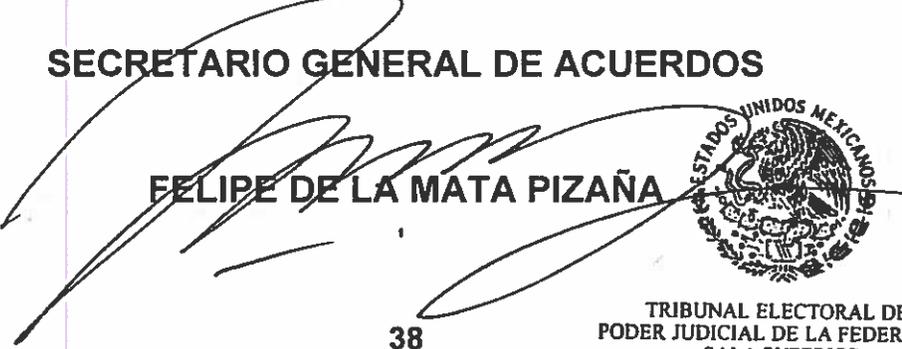
MAGISTRADO


**SALVADOR OLIMPO NAVA
GOMAR**

MAGISTRADO


PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS


FELIPE DE LA MATA PIZAÑA

